



Abril - Mayo - Junio 2011 N° 47

Boletín Trimestral

Programa: Democracia, Seguridad y Defensa

HACIA UNA CULTURA DE DIÁLOGO Y PAZ



Los costos del uso de la fuerza militar en tareas de seguridad interior

Bertha García Gallegos*

No nos referimos a los evidentes costos para la democracia y los Derechos Humanos, sino a los que afectan o afectarán a las mismas organizaciones militares en el mediano plazo.

Acosada por el extremo individualismo, la sociedad occidental experimenta una enorme proliferación de la delincuencia en todas sus formas. La economía del consumo expandida, globalmente e interiorizada hasta el punto de producir necesidades incesantes y excesivas, junto con la distorsión de los valores más importantes como la libertad y autonomía individual, constituyen la base de sociedades incapaces de producir la solidaridad necesaria para vivir en paz.

Frente a ello, la inseguridad se ha convertido en el eje de las demandas sociales hasta el punto de que la gente llega a legitimar medidas extremas que atentan justamente a los valores más apreciados que dicen profesar. En ese contexto podemos ver cómo, en estos últimos años los gobiernos, rebasados por la enormidad de las circunstancias, acuden al uso de la fuerza militar en apoyo o en lugar de las fuerzas policiales

para tratar de contener el avance no solo de la delincuencia común sino de las organizaciones delincuenciales de carácter transnacional.

No tiene objeto sostener rígidamente que las fuerzas armadas no son el medio adecuado para hacer frente al fenómeno delincencial, ubicado precisamente en el ámbito que llamamos Seguridad Interior -que requiere de otras instituciones habilitadas por el derecho público como son las policías. La coyuntura actual indica claramente la preeminencia de las problemáticas de la Seguridad Interior en las agendas regionales, los organismos internacionales y los propios estados soberanos. El crimen organizado tiende a formar sistemas territorializados y a las policías por sí solas se les dificulta resolver el tema de la estabilización espacial, lo que sí se puede lograr con la ayuda de los militares.

Hablamos de "ayuda", "apoyo", no de que los militares asuman la responsabilidad frente a estos desafíos, lo que parece ser la tendencia en muchos de los países latinoamericanos. La delincuencia es por sí misma un fenómeno individual que afecta al estatuto jurídico de las personas frente

a la comunidad y al Estado, y las estrategias policiales son las únicas que, en último término, permitirán poner al delincuente frente a la justicia de manera legítima.

Abocados a "descender" hacia el ámbito de la Seguridad Interior, los militares bien podrían ubicarse en puntos específicos en donde sus destrezas serían imprescindibles. Es mejor que no se intente copar todo el escenario que corresponde por su naturaleza jurídica a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de defensa tienen que aprender a trabajar con ellas y a no desplazarlas porque esto tendrá consecuencias graves para su propia institucionalidad.

Si se desliza hacia el campo de la lucha contra el crimen con la misma estructura que se emplea frente a la guerra, hay demasiadas cosas que estarán en entredicho; entre ellas, vale resaltar, la eficacia de la acción militar porque el enfrentamiento con la delincuencia -de cualquier tipo que sea- no es una guerra que se pueda vencer con las armas, ni con la organización lineal y de estados mayores que caracterizan a las fuerzas armadas. Si los militares tratan de aprovechar la situa-

CONTENIDO

■ Editorial

Los costos del uso de la fuerza militar en tareas de seguridad interior

Dra. Bertha García Gallegos pág. 1

Los desafíos de hacer periodismo en ambientes de conflicto armado

João Paulo Charleaux* pág. 2

Gobernando la seguridad por decreto.

REPORTAJE pág. 4

Participación del programa DSD en eventos internacionales recientes

pág. 9

La tragedia de Centroamérica: de la violencia política a la violencia criminal.

Roberto Cajina pág. 10

Cronología Defensa, Seguridad Pública y Ciudadana.

María Sol Espinosa pág. 13

ción para estar vigentes, mantener su importancia en la escena social o por cualquier otra consideración, con el pretexto de que ahora ya no hay guerras convencionales, tendrán que adquirir muchos otros conocimientos y experticias que no son de su campo; tendrán que desarmar sus estructuras clásicas y en consecuencia, su naturaleza militar se diluirá hasta el infinito. Dejarán de ser lo que eran. Cuando se los necesite no se los encontrará ¿Es esto lo deseable?

Tal cosa ya ocurrió en América latina y no debe olvidarse. El desarrollismo militar convirtió a los ejércitos en entidades plurifuncionales; al emplearse en múltiples misiones ajenas a sus funciones constitucionales, se empobrecieron a sí mismas e impidieron la construcción de capacidades civiles para la administración del Estado. El éxito de la institución militar en la historia es precisamente porque ha sido especializada en una sola misión, la defensa territorial y la independencia de su nación. Interpretar esta misión de manera ambigua, no vale la pena.

Ahora mismo, existen preocupaciones porque en las escuelas de estado mayor o de comando en América Latina e incluso en Estados Unidos “no hay mucha claridad sobre cuáles son los desafíos reales que los militares tendrán en el futuro (Military Review, Marzo-Abril 2011) Entre las materias que se han debilitado está la enseñanza de la estrategia. Esto porque en la mayoría de países se carece de una idea estratégica global que se plasme en los ámbitos propios de la defensa nacional, sin lo cual es difícil tener una interpretación estratégica adecuada a los tiempos y a las circunstancias. Los militares estudian ahora materias como marketing, administración de empresas, y doctrinas que vienen del mundo civil y no las que corresponden a la naturaleza clásica del pensamiento militar (Sun Tzu, Clausewitz, Jomini, Foch, Hart) y al pensamiento estratégico moderno propio de su campo.

Es así como las “nuevas misiones” ponen a los militares en una disyuntiva. Al tener que adquirir nuevos conocimientos para sus nuevas tareas y

operaciones conjuntas, tienden a aflojar la formación clásica y adiestramiento especializado que corresponde a su respectiva fuerza, sin que todavía no haya surgido en el panorama internacional un marco doctrinario sobre las futuras amenazas al Estado. La globalización nos ha hecho entender que hay más cosas que ignoramos que las que conocemos. No sabemos cómo son en realidad las sociedades que en este momento se movilizan y hacia donde lo hacen; nada sabemos con profundidad sobre los nuevos desafíos a la soberanía de los estados y no tenemos certezas en el largo plazo. En este sentido, las presiones por buscar un quehacer a las fuerzas armadas en el campo de la Seguridad Interior sin analizar profundamente lo que ello implica para el futuro de estas fuerzas frente a realidades que están por conocerse y que presentan contornos ambiguos, podría ser demasiado arriesgado.

*Bertha García Gallegos. Directora Proyecto Democracia, Seguridad y Defensa, PUCE.

Los desafíos de hacer periodismo en ambientes de conflicto armado

João Paulo Charleaux - 30/06/2011*

Durante los cinco primeros meses del 2011, 27 periodistas fueron asesinados de forma violenta por razones ligadas al ejercicio de su profesión. Los datos del INSI (International News Safety Institute) presentados en el Congreso de ABRAJI (Asociación Brasileña de Periodismo investigativo) son alarmantes, pero apenas es una fracción de lo que acontece. No es difícil imaginar lo que de hecho está pasando en los rincones de Brasil o de otros países en donde ocurren conflictos armados de gran visibilidad. Lo que existe es un tremendo poder económico y político, muchas veces vinculado a grupos criminales y mafias con intereses locales e internacionales que no dudan en comprar, amenazar, amedrentar o por último eliminar físicamente a los periodistas que se opon-

gan a sus intereses. Todo esto ocurre en “tiempos de paz”.

Son muchos los ejemplos de periodistas brasileños afectados por los riesgos de dar cobertura a situaciones de violencia armada – sin contar con los daños, psicológicos, pasajeros o permanentes, provocados en reporteros y familiares que acompañan estas coberturas. Sobre ese aspecto particular –el aspecto psicológico– muy poco se habla. Tal como se ve, el tema es al mismo tiempo histórico y actual. Los riesgos de cubrir situaciones de extrema violencia son muchos y las tentativas de disminuir esos riesgos son muy relativas. Aunque cabe decir que actualmente observamos que, cada vez más militares, juristas, periodistas, trabajadores humanitarios, políticos y

activistas se dedican al debate sobre las mejoras de las condiciones de trabajo de los periodistas de guerra.

Cursos de preparación de los periodistas en recintos militares.

Hoy en día, la mayor parte de estas iniciativas pasan por la realización de cursos de preparación. Estos cursos representan para muchos jóvenes periodistas el primer contacto con armas de fuego, municiones y vehículos militares, además de ciertas jergas, jerarquías, patentes y otros aspectos del mundo militar. En dos ocasiones, en 2007 y 2008, fuimos invitados por las Naciones Unidas y por el Ejército brasileño a participar en el curso de preparación de periodistas realizado en Rio de Janeiro por el Centro de Prepara-

ción para Misiones de Paz, del Ejército. Fue un privilegio ver por dentro cómo funciona esta iniciativa.

Hablando de forma clara: para los militares, esto ha sido una ganancia. En el espacio de menos de una generación, las Fuerzas Armadas olvidaron su rencor que existía con la prensa desde el fin de la dictadura. Este es un fenómeno que merecería atención especial de los periodistas de investigación de toda la región. Hemos percibido que ciertos aspectos de la vida de cuartel fascinan a los reporteros que se ocupan de estos temas, muchos de los cuales mastican secretamente el sueño frustrado de haber querido ser militares. En la inmersión ficticia propuesta por el curso – que puede durar unos tres días de “campaña” – es curioso ver cómo, naturalmente, con la convivencia diaria, la frontera entre militares y periodistas se diluye convirtiéndolos en poco menos que grandes camaradas de campaña. No es difícil imaginar el impacto que esta relación tendrá en la producción del contenido periodístico. Si por un lado, la empatía hace posible a los reporteros entender mejor el temor constante que los militares tienen ante el rigor de cometer posibles deslices o abusos en el desempeño de sus tareas; por otro también los militares podrán entender las dificultades y compromisos éticos que existen entre el reportero y su fuente que, en estos casos, desempeña paralelamente el papel de protector, guarda-costas, hospedero, alimentador y guía de los reporteros.

El escenario más visible donde esto ocurre para nosotros los brasileños, es Haití. Allí estuve, hace poco, invitado por el ministerio de defensa, como enviado especial del jornal O Estado de S. Paulo. La mayor operación militar brasileña desde la Guerra do Paraguay, en 1864, es cubierta con tonos triunfalistas. Poco se lee sobre los BOI (Boletines de Investigación Interna) abiertos por la ONU para vigilar los posibles crímenes cometidos por los militares en Haití. No se trata de estar en contra o a favor de las fuerzas de la ONU – me gustaría dejar claro que, personalmente, apoyo la presencia de la ONU en Haití – pero sería importante hacer la cobertura sobre

Haití con el mismo rigor que ponemos sobre otros temas que aparecen en las páginas de los periódicos.

Sobre esto, hemos escrito, conjuntamente con el reportero fotográfico Thiago Quieroz, también del Estadão, un reportaje crítico sobre las tropas brasileñas referente a una denuncia de que militares brasileños habrían invadido una facultad haitiana efectuando disparos con munición real, asustando a los estudiantes e intoxicando a un grupo de ellos con decenas de bombas de gas lacrimógeno lanzadas deliberadamente dentro de un pequeño espacio cerrado. Al contrario de lo que estipula el mandato de la ONU y las normas penales, los militares estarían buscando arrestar a jóvenes militantes ligados a los asuntos electorales del país. Esta es una denuncia gravísima y no recuerdo haber visto hasta aquí un reportaje tan crítico sobre una acción del ejército brasileño en Haití. Otra materia de falso apoyo (“falsa guerra rinde salarios más altos”) muestra cómo funcionarios civiles de la ONU clasifican a un país como localidad de gran riesgo, solo para garantizar un incremento en sus salarios, con la disculpa de dar a su tarea una adicional peligrosidad. En otro caso, un miembro de las fuerzas de paz apunta una pistola contra un reportero independiente americano –Ansel Herz– diciéndole: “Si usted me filma, yo le disparo”. Este episodio provocó la apertura de una investigación interna en la ONU, pero no he sabido que algún otro periodista brasileño esté siguiendo este tema.

Estos ejemplos son suficientes para mostrar lo incómodo que es ir a Haití o a cualquier otro sitio donde ocurren misiones cercanas a la violencia armada, incluyendo las misiones de paz y hacer una cobertura independiente estando bajo la protección de los militares. Muy pocas empresas periodísticas estarían dispuestas a cargar con los costos de hacer una cobertura de este tipo. En pocas palabras, es muy difícil, tal vez imposible, hacer periodismo investigativo en Haití andando para todos los lados con las tropas brasileñas. Al final, a los ojos de un manifestante agredido por militares, ¿cuál es la diferencia en-

tre un militar del servicio de inteligencia y un reportero que anda haciendo preguntas y anotando nombres durante el día, para en la noche dormir en la misma base que los militares?

Sin embargo, es preciso reconocer que los datos del INSI comprueban que la letalidad es mayor para los periodistas que cubren conflictos armados sin la protección de las Fuerzas Armadas, a los que los militares llaman “periodistas independientes”. Sin duda, los periodistas que cubren conflictos armados están frecuentemente atormentados por cuestiones como éstas: ¿Cómo equilibrar Independencia con Seguridad? ¿Cómo acceder a las fuentes en coberturas críticas? ¿Cómo movilizarse en lugares de guerra sin condiciones ideales de logística, alimentación y comunicación? En fin, preguntas que nos llevan a examinar una parte oculta de este asunto: el papel desempeñado por las propias empresas de comunicación, tema que vale la pena seguir discutiendo.

Aspectos psicológicos y jurídicos

Aspectos psicológicos.- El apoyo psicológico a los periodistas afectados por coberturas de violencia o desastres naturales es muy precario hoy en día. Diciendo de otra manera, muchas de las quejas o temores de los reporteros todavía son percibidos con prejuicios, como una especie de falta de coraje que se supone debería ser inherente a los “reporteros de verdad”. El síndrome de stress pos-traumático suele afectar a los periodistas que han sido expuestos a la cobertura de temas impactantes. Es difícil medir, entretanto, lo que es un evento impactante. Algunas veces, un simple accidente de carro puede provocar un trauma, y en otras, el presenciar escenas de franca desgracia no deja ninguna secuela. La medida del stress es bastante personal y los efectos de un posible trauma se pueden manifestar inmediatamente o muchos años después de vivenciado el episodio.

En una tentativa de ayudar a cuidar la salud mental de los periodistas, el INSI (International Safety Institute) publicó en su página de internet una breve ex-

plicación sobre stress pos-traumático y ha sugerido a los periodistas que se realicen un auto-diagnóstico para casos de stress. En la dirección <http://conflict-study.com/index.html> es posible saber más sobre el síndrome. Este sitio dice que los periodistas afectados por stress emocional "muchas veces están en lugares que no permiten los cuidados necesarios, donde una evaluación emocional adecuada no puede ser realizada". De allí la importancia de un diagnóstico a distancia.

No es raro que periodistas expuestos a situaciones extremas manifiesten síntomas como: insomnio, irritabilidad, alteraciones del apetito, baja libido. Consumo excesivo de alcohol, tabaco u otras drogas, alteraciones gastrointestinales, pánico, sensación de culpa por haber sobrevivido a una situación en la cual otras personas perdieron la vida, flashbacks involuntarios de ciertos momentos de tensión. La lista no termina allí. Los síntomas pueden aparecer hasta mucho tiempo después de haber vivido el trauma y es preciso que los colegas de redacción, amigos y familiares estén atentos y sepan como ayudar. De forma simple, un primer apoyo debe ser el diálogo. Psiquiatras coinciden en decir que las simples oportunidades de hablar sobre la experiencia vivida puede evitar un daño emocional mayor. Miembros de un equipo periodístico en terreno deben estimular la conversación entre ellos como una forma de reducir paulatinamente la tensión. El silencio en estas horas no ayuda.

En cuanto a los aspectos jurídicos, Es común que periodistas que cubren guerras se refieran a sí mismos como "corresponsales de guerra". Jurídicamente, este término se refiere a los periodistas que hacen parte de una fuerza armada, y que exponen insignias y patentes; y no a los periodistas de un medio de comunicación independiente. Desde el punto de vista jurídico, esta distinción es importante. Al final, "corresponsales de guerra" pueden ser considerados combatientes y, en caso de captura, ser prisioneros de guerra, como lo determinan las Convenciones de Ginebra de 1949.

Para ejemplificar: si el periodista Andrei Netto, corresponsal do jornal O Estado de S. Paulo en París, detenido en Libia, fuese un "corresponsal de guerra", podría ser mantenido preso hasta el final del conflicto, sin que eso significase una violación de las Convenciones de Ginebra. Netto era, un periodista civil, como define el Artículo 79 del Protocolo Adicional II de las Convenciones de Ginebra. En este caso, no teniendo ningún crimen que justifique su detención, debería ser liberado. Y, felizmente, eso fue lo que aconteció.

Pero la protección jurídica de los periodistas en situaciones de guerra no es tan fácil. Muchos dicen que el Protocolo II es insuficiente para proteger a los reporteros, en la medida que los califica genéricamente como "civiles". Los que piensan así dicen que los periodistas representan una categoría especial, expuesta

a riesgos adicionales, y que, por tanto, debería gozar de una protección explícita mucho más amplia. Los periodistas deberían, por eso, usar un emblema que los identifique en el terreno, y los ataques contra estos emblemas deberían ser considerados como crímenes de guerra.

Quienes no están de acuerdo con este argumento presentan una réplica potente: dicen que al dotarles de un emblema o distintivo a los periodistas que van a cubrir un evento, se les convertiría en un foco incluso más visible. Dado el aumento del uso del terrorismo como una estrategia de lucha, los ataques a los periodistas ganarán un impulso inédito y, en muchos casos, es más seguro no ser visto como periodista en un terreno de operaciones. Este debate se halla hoy en un impase tal que hasta la misma Organización de las Naciones Unidas tiene temor de instar a los Estados a que respeten a los periodistas. Esto es, sin duda, muy poco.

REFERENCIAS

*João Paulo Charleaux. Periodista brasileño, frecuente colaborador del Boletín DSD PUC, ha tenido responsabilidades importantes en la Cruz Roja brasileña. Actualmente es reportero en el Journal Do Rio de Janeiro. Colabora en el medio virtual "Última Instancia" (<http://ultimainstancia.uol.com.br/>). Los materiales presentados en este artículo corresponden a las ponencias del autor debatidas en el sexto Congreso Internacional de la ABRAJI (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) realizando en este mes de junio en São Paulo, traducidas y editadas por DSD con este propósito.

Gobernando la seguridad por decreto.

Reportaje

Un problema específico que afecta, desde la transición post dictatorial, a la mayoría de las democracias latinoamericanas, dentro del tema de la consolidación institucional y la calidad de la democracia, es el crecimiento del poder ejecutivo para legislar por decreto, incluso de manera regular. No pocos estudios consideran a éste como uno de los "síntomas más evidentes de la debilidad del Estado de Derecho".

Según Gabriel Negreto uno de cuyos artículos tomamos como referencia para este comentario- El Constitucionalismo puesto a prueba, Revista Isonomía N° 14, 2001- el fenómeno no es aislado puesto que muchos de los estados de la región cuentan con esta capacidad constitucional para casos eventuales, aunque hay que resaltar que en un estado democrático la autoridad está sometida a la ley y debe hacer solo lo que la ley le permite. Pretender sustituir al legislador y dictar normas generales que van

más allá de la ley es una expresión de autoritarismo.

El presidencialismo se ha afianzado en la región en contra de corrientes -que también se dieron a conocer en el Ecuador con anterioridad a los procesos de reforma constitucional de 1998 y 2008 - de limitar el poder presidencial por medio de la figura de un primer ministro sujeto a responsabilidad parlamentaria. El hecho reproduce un viejo dilema de la historia constitucional: "la dificultad de conciliar la

necesidad de primero capacitar al gobernante para controlar a los gobernados, y en segundo lugar, obligarlo a controlarse a sí mismo". Una forma de ver esta contradicción –según el autor que comentamos- es la siguiente: "un gobierno provisto de los medios para gobernar en forma efectiva, bien podría utilizar esos mismos medios para colocarse por encima de la constitución y de los ciudadanos". De allí la importancia de la división de poderes.

Sin duda los decretos ejecutivos pueden ser considerados como un instrumento administrativo ágil. Pero existen decretos y decretos: aquellos que ponen en vigor una Ley sin la necesidad de pasar por el Legislativo; aquellos que modifican la propia Constitución –como uno de los más recientes decretos ejecutivos del gobierno ecuatoriano para usar a las fuerzas armadas en la seguridad ciudadana; y aquellos decretos de emergencia, que bien pueden ser de utilidad en casos de necesidad extrema, pero que utilizados como tecnología habitual de gobierno,

agudizando las discrecionalidades, pueden conducir a debilitar los mecanismos de rendición de cuentas y la credibilidad de los ciudadanos en la democracia.

En el siglo XIX, al constituirse los estados latinoamericanos, los constituyentes recurrieron a dotar al ejecutivo de poderes de emergencia en circunstancias en que el gobierno nacional debía hacer frente a enemigos externos, periódicas rebeliones internas y frenar la ambición de los caudillos locales y regionales. También se ha mencionado como otras dos causas de la tendencia a legislar por decreto ejecutivo: el tinte autoritario que generalmente ha tenido la política latinoamericana, y la influencia de los caudillos militares en el siglo XIX y/o de las doctrinas militares politizadas del siglo XX en los diseños constitucionales de la región.

Frecuentemente se alude a la clásica rivalidad Ejecutivo-Legislativo y se asume que un gobierno que tenga una mayoría parlamentaria no tendría que acudir a este

mecanismo. Esta versión ha sido refutada por los analistas que estiman que la gobernabilidad por decreto y no por la recurrencia a la estabilidad de las instituciones, se practica más frecuentemente donde no existe una oposición fuerte y estable que pueda generar una futura alternancia en el poder y que esté convencida de que cuando le toque su turno, debe auto limitarse en el uso del poder a su alcance.

Es posible que todos estos factores, en diversos grados hayan tenido su influencia en la extrema relatividad –que a pesar de los innegables avances en esta última década- afecta a la democracia en la región. El problema es mayor cuando la materia en cuestión es la política de Seguridad, que se supone no debe estar al vaivén de las condiciones del corto plazo, sin ofrecer a la ciudadanía un verdadero sistema de seguridad que funcione en tiempo real, en crisis y en normalidad, logro que deviene de una constante construcción de capacidades de previsión y prevención.

Ecuador: Decretos del Presidente Rafael Correa relacionados con seguridad y defensa.

Decretos presidenciales año 2007- Seguridad y defensa

No. DECRETO	TÍTULO	REGISTRO OFICIAL
152	Creación Comisión para el apoyo a la Modernización de la Policía Nacional del Ecuador	No. 45 19/03/2007
305	Creación de la Comisión de la Verdad	No. 87 18/05/2007
748	Creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.	No. 220 27/11/2007
770	Declaratoria de emergencia, por grave conmoción interna en la provincia de Orellana	No. 231 13/12/2007
796	Terminación del estado de emergencia y la movilización declarada y dispuesta en su orden en la provincia de Orellana	No. 237 21/12/2007
825	Utilización de recursos del fiduciario del fideicomiso "Fondo de Ahorro y Contingencias" (FAC) para cinco proyectos de la policía nacional dentro estado emergencia.	No. 247 08/01/2008
433	Aprobación "delimitación de los espacios geográficos nacionales reservados que estarán bajo el control de las Fuerzas Armadas"	No. 114 27/06/2007
441	Declaratoria de estado de emergencia en el sistema penitenciario de todo el país	No. 121 06/07/2007

503	Reforma al decreto 246-a de 29/04/ 1997 de creación de la Autoridad Nacional de Armas Químicas	No. 147 14/08/2007
528	Reglamento sustitutivo del programa de protección y asistencia a las víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal	No. 150 17/08/2007

Decretos presidenciales año 2008- Seguridad y defensa.

881	Proceso de equiparación de las remuneraciones del personal militar en servicio activo y pensionistas de las Fuerzas Armadas.	No. 268 08/02/2008
906	Reformas al decreto 565 de R.O. 158 de 29/08/2007, por el que se creó la Secretaría Técnica del Plan Ecuador	No. 275 16/02/2008
916	Aplicación del decreto 881 de 21/01/08 al personal en servicio activo y pasivo de la Policía Nacional para equiparación de sus remuneraciones	No. 284 28/02/2008
1107	Creación de la Unidad de Ejecución Especializada adscrita al Ministerio de Gobierno	No. 354 06/06/2008
1118	Renovación de estado de emergencia en diferentes áreas de la Policía Nacional del Ecuador y de la Unidad Ejecutora Especializada del Plan de Seguridad Ciudadana	No. 359 13/06/2008
1142	Renovación del estado de emergencia por grave conmoción en el sistema penitenciario en todo el país.	No. 384 18/07/2008
1179	Creación de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la implementación del Sistema Procesal Penal	No. 379 11/07/2008
1181	Se expide reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.	No. 383 17/07/2008
12 21	Adhesión del Ecuador al protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974.	No. 401 12/08/2008
1251-A	Contrato para relleno hidráulico para las poblaciones de San José y San Agustín entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) -Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador	No. 409 22/08/2008
1475	Reforma al Reglamento General a la Ley de Seguridad Nacional	No. 493 22/12/2008
1484	Proceso de extinción de la H. Junta de Defensa Nacional	No. 497 30/12/2008
1507	Refórmese art. 38 del Reglamento a Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional (mejoras atención de salud de personal policial).	No. 500 06/01/2009
1515	Reformas al Reglamento General de aplicación de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.	No. 498 31/12/2008

Decretos presidenciales año 2009- Seguridad y defensa.

27	Prorrogase hasta el 10 noviembre 2009, plazo de vigencia Comisión encargada investigar y esclarecer hechos relacionados con lo acontecido en Angostura	No. 25 14/09/2009
----	--	-------------------

82	Declarase por sesenta días, ante la agresión del crimen organizado, el estado de excepción, sin suspensión de derechos, en las ciudades de Guayaquil, Quito y Manta.	No. 42 07/10/2009
147	Se reforma decreto 1511 publicado R.O. (s) 498 del 31 diciembre 2008, en el sentido que la seguridad de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión estará a cargo de la Policía Nacional.	No. 81 04/12/2009
1520	Se expide reforma al reglamento a la ley de personal de la Policía Nacional.	No. 508 16/01/2009
1573	Expedir las siguientes reformas al reglamento a la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones explosivos y accesorios	No. 529 16/02/2009
1622	Reglamento para contrataciones de bienes estratégicos y servicios conexos necesarios para la defensa nacional.	No. 560 31/03/2009
1646	Créase la Comisión encargada de investigar y esclarecer los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de marzo del 2008.	No. 565 07/04/2009
1720	Reglamento general a la Ley de personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador.	No. 578 25/04/2009
1721	Reglamento general a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.	No. 594 20/05/2009
1743	Ratificase "acuerdo entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación técnico-militar".	No. 607 08/06/2009
1781	Se expide reforma al reglamento general a la Ley orgánica de la Defensa Nacional, con la derogatoria de su artículo 12.	No. 621 26/06/2009

Decretos presidenciales año 2010- Seguridad y defensa.

614	Ratifíquese en todos sus artículos acuerdo de cooperación técnico-militar entre gobiernos Repúblicas de Venezuela y Ecuador.	No. 361 12/01/2011
613	Ratifíquese en todos sus artículos acuerdo marco de cooperación entre gobiernos Repúblicas del Ecuador y Brasil, sobre cooperación en el dominio de la defensa.	No. 361 12/01/2011
583	Reforma art. 38 del reglamento a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional (atención de salud del personal policial).	No. 351 29/12/2010
571	Declárese el estado de excepción en todas las instalaciones de la Asamblea Nacional que representa la función legislativa de la República del Ecuador, que fue afectada por la insubordinación policial	No. 344 20/12/2010

521	Reformas al Reglamento del Consejo de Generales de la Policía Nacional.	No. 316 09/11/2010
500	Ratifíquese en todos sus artículos acuerdo marco de cooperación entre gobiernos Repúblicas del Ecuador y Brasil, sobre cooperación en el dominio de la defensa.	No. 361 12/01/2011
493	Renuévase estado de excepción en todo el territorio nacional, en razón de que algunos integrantes Policía Nacional en la sede asamblea nacional, produjeron actos bochornosos, de fuerza.	No. 296 08/10/2010
486	Expídase reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.	No. 290 30/09/2010
477	Reformas Reglamento general a Ley de personal Fuerzas Armadas del Ecuador, expedido con decreto 1720, publicado R.O. 597 de 25 mayo 2009. (sistema de ascensos y promociones).	No. 290 30/09/2010
418	Fusiónese la Casa Militar Presidencial y el Escuadrón de Transporte Aéreo presidencial en el servicio de protección presidencial.	No. 243 26/07/2010
416	Créase Grupo de Trabajo Multisectorial que constituye Sección Nacional Ecuatoriana de Comisión Binacional Ecuador-Perú de lucha contra el contrabando.	No. 242 23/07/2010
410	Cámbiase denominación Ministerios de Gobierno y Policía; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Coordinación de la Política.	No. 235 14/07/2010
309	Ratifíquese en todos sus artículos el "Protocolo facultativo a la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".	No. 175 20/04/2010
281	Ratifíquese en todos sus artículos la "Convención sobre municiones en racimo", firmada en Oslo el 3 de diciembre de 2008.	No. 162 31/03/2010
274	Reforma al reglamento general de aplicación de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.	No. 152 17/03/2010

Decretos presidenciales año 2011- Seguridad y defensa.

784	El Ministerio del Interior asumirá competencias unidad de ejecución especializada creada mediante decreto 1107 de 22 mayo 2008. (Plan Nacional de seguridad ciudadana).	No. 464 07/06/2011
749	Se establece que Consejo Sectorial de seguridad será el organismo de la función ejecutiva responsable de la coordinación, seguimiento y acciones vinculadas al control de armas de fuego.	No. 442 06/05/2011

677	Expídase reformas al reglamento general a la ley de personal de Fuerzas Armadas, contenido en decreto 1720, publicado R.O. 597 de mayo 25, 2009.	No. 405 16/03/2011
632	Se reorganiza la Policía Nacional, disponiendo que la representación legal, judicial y extrajudicial, sea asumida por el Ministerio del Interior.	No. 372 27/01/2011

Fuente: SIGOB

Autor: David Arcentales, Investigador Programa DSD

Participación del programa DSD – PUCE en eventos internacionales recientes

Reunión Grupo de Trabajo de NN.UU sobre el Documento de Montreux para regular la participación de Empresas Militares de Seguridad Privada en conflictos armados. Santiago Chile 12- 13 mayo del 2011.

La reunión regional fue auspiciada por el gobierno chileno y el Comité Internacional sobre los Derechos Humanos conjuntamente con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre este tema. En esta ocasión, con la participación de delegaciones oficiales de Brasil y Argentina junto a representantes de los cuerpos militares y policiales de varios países de la región, la academia, organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales, cancillerías y embajadas, tanto latinoamericanos como de Estados Unidos, Suiza y el Reino Unido se examinó el Documento de Montreux (2008), instrumento intergubernamental que promueve a nivel mundial el respeto del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en todos los conflictos armados donde intervengan empresas militares y de seguridad privadas.

El documento recuerda las obligaciones jurídicas internacionales y las buenas prácticas relativas a las operaciones de las empresas militares de seguridad privada durante los conflictos armados. En los últimos años, ha crecido la utilización de EMSP y por tanto existe la necesidad constante de aclarar tales obligaciones

y prácticas contempladas en el Derecho Internacional humanitario y en el Derecho Internacional de los DDHH. El Documento no busca establecer nuevas normas, sino orientar sobre una serie de aspectos jurídicos y puntos prácticos, centrándose en la perspectiva del Estado y su obligación de regular las actividades de sus ciudadanos que trabajen con EMSP en conflictos armados de otras partes del mundo.

El Ecuador se adhirió al Documento el 12 de Febrero de 2009. Para América Latina en general, el tema tiene interés por la participación de Fuerzas Armadas en operaciones de paz. En particular, cuando son utilizadas en la guerra contra las drogas o contratadas por las industrias transnacionales extractivas para su seguridad. Finalmente, el Documento de Montreux ofrece apoyo a los Estados, las empresas y la sociedad civil para comprender mejor el fenómeno de la privatización de la seguridad. Por parte del Programa DSD, Sol Espinosa presentó los resultados de la investigación auspiciada por la PUCE "Estado, Seguridad y Poblaciones Vulnerables".

VII SEMANA IBEROAMERICANA DE DEFENSA. "El concepto y las relaciones multilaterales de seguridad y defensa en el contexto de la UNASUR"

Entre el 7 y el 9 de junio, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se realizó en Quito la VII Semana Iberoamericana de Defensa, auspiciada por el Ministerio de Defensa Nacional y el Instituto Universitario General Gutiérrez

Mellado de España, con la coordinación de Sonia Alda, investigadora del IUGM. Al evento concurren expertos iberoamericanos que discutieron temas relativos a la cooperación regional en defensa y seguridad en Suramérica. En la inauguración, el ministro de defensa del Ecuador, Javier Ponce y el director general de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa de España, Fernando Flores Giménez, señalaron la necesidad de tener "posiciones regionales de proyección mundial para contribuir al equilibrio global".

En el evento se desarrollaron tres ejes temáticos: Conceptos de Seguridad; Nuevas agendas de Seguridad y Defensa en la región; y Organizaciones e iniciativas regionales. Se discutieron estos temas a lo largo de tres jornadas con ocho mesas de trabajo integradas por expertos académicos y representantes institucionales. Entre los temas específicos se presentaron aspectos sobre el estado de la cuestión en torno a los conceptos de seguridad y defensa; la experiencia europea como proyecto común de seguridad y defensa; las aplicaciones prácticas de los conceptos de seguridad en las políticas de defensa nacionales; avances en la confianza y en la cooperación regional. El crimen organizado en la región y propuestas de enfoques y estrategias de cooperación. Por el Programa Democracia, Seguridad y Defensa de la PUCE participó la Dra. Bertha García Gallegos, con una ponencia sobre aspectos de las estrategias de integración de los medios militares y de seguridad en los fenómenos de seguridad compleja.

La Semana Iberoamericana de Defensa ha sido un mecanismo académico de enorme importancia para la integración de los sectores de la Defensa en Iberoamérica desde el 2003, cuando el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, durante la gestión del entonces director del Instituto Gustavo Suárez Pertierra, lo inició y dio paso a un encuentro anual que se convocaba en España. Actualmente este mecanismo promueve los encuentros en los países iberoamericanos con un concepto de integración global.

TALLER INTERNACIONAL "RETOS Y PERSPECTIVAS DEL LITIGIO ESTRATÉGICO EN AMÉRICA LATINA"

Guatemala, 27 – 29 de Junio de 2011.

El evento fue organizado por la Comisión Internacional de Juristas, el Equipo de Apoyo Técnico al Litigio

Estratégico (EATLE), la Unión Europea, el Reino de Noruega y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. El Taller y Foro público sobre este tema contó con la participación de dirigentes sociales, juristas y académicos. El objetivo tanto del Taller como del foro fue compartir e intercambiar experiencias en materia de litigio estratégico entre dirigentes sociales y abogados, además de presentar ante la opinión pública el Litigio estratégico como un instrumento para hacer efectivos los derechos colectivos de los Pueblos indígenas. El Programa DSD fue invitado a participar en el evento donde Sol Espinosa presentó los resultados de la investigación, a cargo del Programa DSD y auspiciado por la PUCE sobre estrategias de las organizaciones de base y las comunidades ecuatorianas en conflictos medioambientales.

La importancia del litigio estratégico es su capacidad de utilizar al Derecho como un factor de transformación social por medio de un conjunto de diferentes estrategias y litigios jurídicos como también judiciales. En este sentido, a través del juicio de un caso específico se puede crear un precedente que trascienda los intereses individuales y genere cambios sociales más amplios con el propósito final de la defensa del interés colectivo, la promoción de los Derechos Humanos y la justicia social.

La tragedia de Centroamérica: de la violencia política a la violencia criminal

Roberto Cajina*

Las guerras civiles en Centroamérica finalizaron en 1990 (Nicaragua), 1992 (El Salvador) y 1996 (Guatemala) y tras ellas se iniciaron inéditos procesos de transición del autoritarismo a la democracia. Sin embargo, la precaria paz alcanzada en esos países pronto sería arrasada por un fenómeno no deseado o no calculado: la violencia criminal.

Con una extensión territorial de 522.760 km² y 45,7 millones de habitantes, de los que la mitad vive en condiciones de pobreza, el narcotráfico, el crimen transnacional organizado y la violencia juvenil han hecho de Centroamérica la región más violenta de América Latina y el mundo, con una tasa de homicidios de 33,3 por cada 100.000 habitantes, cifra que sobrepasa 28.8 del

Caribe, 24.8 de los países andinos y 10.9 del Cono Sur, y es cuatro veces superior a la media mundial de 8.8 por 100.000 habitantes.

Las porosas fronteras, las largas líneas costeras precariamente vigiladas por fuerzas navales de capacidades limitadas, las debilidades estructurales y las fragilidades institucionales, han sido aprovechadas por los cárteles de la droga para hacer del istmo centroamericano la principal arteria por la que circula, de América del Sur al Norte el 84 por ciento de los estupefacientes que se consumen en Estados Unidos de América. Las cifras de la violencia criminal son pavorosas: más de 13 mil homicidios y US\$ 6.506 millones en costos económicos equivalentes a cerca del 8% del PIB subregional en el 2006. Según el BID, "más del 50% (US\$3.341 millones) son

costos en pérdidas en salud, US\$ 1.281 millones en gastos privados de seguridad, US\$1.137 millones en costos institucionales y el resto en pérdidas materiales". Frente a la incapacidad de los gobiernos para garantizar la seguridad pública, ciudadanos y empresas invirtieron en ese año US\$ 1.238 millones en seguridad privada, es decir, US\$ 146 millones más que los US\$ 1.137 millones presupuestados para todas las agencias involucradas en la prevención y combate de la violencia criminal en Centroamérica¹.

Capacidades y recursos limitados

Para nadie es un secreto que los países centroamericanos carecen de las capacidades y recursos para enfrentar con efectividad la violencia criminal. Los recursos asignados por Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas son ínfimos², y los efectos

de la Iniciativa Mérida, más que severos. Mérida ha provocado un “efecto derrame” en tanto ha obligado a los cárteles mexicanos de la droga a trasladar parte de sus operaciones a Centroamérica, tal como lo advirtió en su oportunidad la Washington Office on Latin America, WOLA³. En Guatemala y Honduras ya se han producido enfrentamientos de bandas de narcotraficantes que se disputan el control del territorio⁴, y en Nicaragua y Costa Rica buscan cómo establecer bases y redes logísticas de apoyo, almacenamiento y refresco. En un reciente estudio —“Seguridad y Crimen Organizado Transnacional”—, realizado por la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia (La Red) con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, se asegura que Centroamérica ha dejado de ser puente de paso para convertirse en una “gran estación de servicio” de los cárteles de la droga.

En ese complejo escenario, los presidentes de Centroamérica aprobaron una Estrategia Regional de Seguridad el 12 de diciembre de 2007, “con el objeto de contar con un instrumento regional idóneo, a fin de crear un ambiente de mayor seguridad para las personas y sus bienes, propiciar el desarrollo humano sostenible a través de las inversiones y actividades relacionadas, con sus componentes, relativos al combate al delito, prevención de la violencia, rehabilitación, reinserción y fortalecimiento institucional”. Con la Estrategia del 2007 revisada, y agobiados por el crecimiento exponencial de la violencia criminal, sin recursos y sin el obligado apoyo financiero y técnico que Estados Unidos debería darles, los países del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, salieron a mendigar la asistencia de la Comunidad Internacional. El 22 y 23 de junio de 2011, se celebró en Guatemala —por cierto el país más acosado por el narcotráfico— la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.

Esta Conferencia Internacional fue convocada con el objetivo de “ge-

nerar un espacio en donde la comunidad internacional y los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) logren desarrollar una discusión de alcance político sobre el tema de la inseguridad en la región, como resultado de las acciones del crimen organizado y los tráfico ilícitos vinculados a ellos, además de lograr el acompañamiento de los socios estratégicos de Centroamérica con fondos frescos adicionales dirigidos a financiar complementariamente los programas regionales de seguridad”. En la Declaración de Guatemala, los jefes de Estado y de Gobierno de países del SICA, con la presencia de presidentes, ministros, jefes de Delegación, altos representantes de países amigos cooperantes, Organismos Internacionales, sector privado y la sociedad centroamericana en general, reconocieron que “la Estrategia de Seguridad de Centroamérica constituye un hito histórico que marca el inicio de una nueva etapa en los esfuerzos para consolidar a Centroamérica como una región segura, en paz, libertad, democracia y desarrollo. Con esa convicción, adoptan dicha Estrategia y se comprometen con su puesta en práctica”.

Entre el clásico juego de palabras de la típica retórica de cumbres, es posible encontrar algunos compromisos, como:

1. Establecer un Mecanismo de Coordinación, Evaluación y Seguimiento, que asuma la responsabilidad de coordinar, evaluar y dar seguimiento al estado de avance en la ejecución de la Estrategia de Seguridad, su Plan de Acción con Costos y el Portafolio de Proyectos.

2. La importancia de establecer mecanismos financieros complementarios para la captación de recursos adicionales para atender los problemas de seguridad regional, en especial un Fondo Canasta en el que se puedan colocar dichos recursos y ser puestos a la disposición de los países del SICA sobre la base de las prioridades acordadas por la región

3. La revisión y armonización de las estrategias nacionales de seguridad con el fin de ajustarlas y fortalecerlas de acuerdo con la Estrategia Regional y desarrollar las sinergias necesarias en las dimensiones locales, nacionales, regionales e internacionales

4. Su decisión de establecer foros de discusión y toma de decisiones, en conjunto con el Grupo de Amigos, a fin de dar sostenibilidad en el tiempo al Portafolio de Proyectos, así como otras necesidades que eventualmente se identifiquen como prioritarios para la región.

Más allá de la retórica, la Conferencia Internacional dejó a Centroamérica, según el ministro guatemalteco de Finanzas, Alfredo Del Cid, apenas un tercio de los US\$ 6.000 millones que se precisan para echar andar los 22 proyectos de la Estrategia Regional, es decir, US\$ 2.000 millones. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, apenas ofreció sumar US\$ 40 millones a los US\$ 260 millones ya asignados a CARSI⁵; Australia anunció un desembolso de US\$ 25 millones y Canadá US\$ 5 millones. Colombia, Rusia, Holanda, Reino Unido, Japón, Taiwán y Finlandia, entre otros, manifestaron su apoyo en capacitación a las fuerzas de seguridad, compartir sus experiencias nacionales y formación profesional de funcionarios, aunque sin precisar el monto de sus ayudas.

De acuerdo con Del Cid, en la Estrategia se han establecido tres diferentes mecanismos para financiar la Estrategia, que serán administrados y coordinados por la Secretaría General del SICA: 1. Una “canasta” en la que se colocarán todas las ayudas, de la que saldrán los recursos para financiar los proyectos; 2. Un fondo multidonante que administrará los recursos que los donantes destinen a proyectos específicos; y 3. Integración de un Comité Coordinador conformado por los países donantes para coordinar y evaluar los avances en la ejecución de los proyectos.

La Declaración, sin embargo, deja abierta una amplia ventana

de dudas. En primer lugar, que parte de una percepción desafortunada. No se trata de "consolidar a Centroamérica como una región segura, en paz, libertad, democracia y desarrollo", porque lo que se precisa es construir esa Centroamérica que no existe. En segundo, porque no existe información oficial que evidencie que la Estrategia haya sido diseñada sobre la base de un diagnóstico serio, profundo y realista. Asimismo, se desconoce el Plan de Acción con Costos y el Portafolio de Proyectos y no se indica si la Estrategia cuenta con un sistema de variables e indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar consistentemente su ejecución.

Creada por el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica (1995) —que le precisa 15 funciones específicas—, la Comisión de Seguridad de Centroamérica, CSCA, es definida como una "una instancia subsidiaria de ejecución, coordinación, evaluación y seguimiento, de elaboración de propuestas, así como de recomendaciones de alerta temprana, y cuando proceda, de pronta acción, subordinada a la Reunión de Presidentes y al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores", y "está compuesta por las delegaciones de los Estados centroamericanos integradas por los viceministros de Relaciones Exteriores y viceministros o autoridades competentes en los ramos de Defensa y Seguridad Pública. Los viceministros de Relaciones Exteriores presidirán las delegaciones de cada estado".

Hasta la fecha el SICA y la Comisión de Seguridad de Centroamérica, CSCA, han dado muestras claras de su enmarañada e ineficiente burocracia y de sus severas limitaciones estructurales e institucionales para administrar eficientemente los temas de su competencia y ejercer adecuadamente sus funciones. Dos ejemplos ilustran estas falencias y debilidades. Uno: es más que notoria la displicencia y la falta de resultados concretos de los diálogos sobre Seguridad Democrática

que la CSCA sostiene en paralelo con México y los Estados Unidos de América, iniciado el primero en 2004 y el segundo en el 2007; y dos, que desde su institución no ha sido capaz de concretar una de las más importantes aspiraciones del Tratado Marco: el balance razonable de fuerzas militares y de seguridad pública de la subregión. Para finales del 2005, la parálisis e ineficiencia de la CSCA era tan notoria y preocupante que los mandatarios centroamericanos, reunidos en la ciudad de León, Nicaragua, la conminaron a preparar a la brevedad un documento de prioridades de la seguridad regional y a que se reuniese para el cumplimiento de sus funciones⁶.

Con tales antecedentes resulta altamente preocupante saber que los recursos que la Comunidad Internacional puso a disposición de Centroamérica —US\$ 2.000 millones, 80 por ciento en créditos blandos y 20 por ciento en transferencias— serán administrados por el SICA. Así mismo, no existe garantía de las capacidades del SICA para establecer y hacer andar con eficiencia el Mecanismo de Coordinación, Evaluación y Seguimiento acordado, menos aún "establecer mecanismos financieros complementarios para la captación de recursos adicionales para atender los problemas de seguridad regional, en especial un Fondo Canasta". Pero además, llama la atención, y refuerza las dudas que el SICA y la CSCA deban ahora revisar y armonizar "las estrategias nacionales de seguridad con el fin de ajustarlas y fortalecerlas de acuerdo con la Estrategia Regional".

Entonces, la pregunta obligada, de nuevo, es ¿cómo fue que ésta se elaboró? Es de presumir que entre la primera versión de la Estrategia y la que se presentó en la Conferencia Internacional transcurrió un tiempo más que suficiente —cuatro años— para haber revisado y armonizado las estrategias nacionales. Las preguntas obligadas son, entonces, ¿cómo se elaboró la Estrategia de Seguridad de Centroamérica que se presen-

tó en la Conferencia Internacional? ¿Qué tan confiable es? y ¿Cuál es su viabilidad y perspectivas de éxito en su ejecución?

Afortunadamente no todo estará en manos del SICA y la CSCA ya que se tomaron algunas providencias clave, como la constitución de "un Comité Coordinador conformado por los países donantes para coordinar y evaluar los avances en la ejecución de los proyectos". También será responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil ejercer un proceso permanente de escrutinio social, y para ello el SICA y la CSCA deben abrirse y transparentar, si es que acaso lo tienen, el sistema de variables e indicadores, el Plan de Acción con Costos y el Portafolio de Proyectos, de tal forma que se facilite la posibilidad de un seguimiento y una evaluación profesional e independiente; de lo contrario, Centroamérica se habrá endeudado en vano, los centroamericanos continuarán hundiéndose en las borascosas profundidades de la violencia criminal y la Comunidad Internacional no volverá a poner recursos en una "canasta" de fondo roto.

REFERENCIAS

* Nicaragüense. Consultor Civil en Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática

¹ "Los costos económicos de la violencia en Centroamérica". En: www.ocavi.com/docs_files/file_538.pdf

² De los US\$ 1.6 millones asignados por Washington a la Iniciativa Mérida, a Centroamérica sólo le correspondieron US\$ 256 millones, es decir,

³ "The Merida Initiative and Citizen Security in Mexico and Central America". En: www.wola.org

⁴ Cajina, Roberto J. "Centroamérica: Región de contrastes y asimetrías". Ensayo preparado para una publicación colectiva que será editada próximamente por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, RSDAL.

⁵ Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica, financiera y funcionalmente separada de la Iniciativa Mérida.

⁶ Declaración de la XXVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, León, Nicaragua, 12 de diciembre de 2005.

CRONOLOGÍA DEFENSA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

Bimestre: noviembre – diciembre del 2010.

*Sol Espinosa Villagómez

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA

Se aprobó informe para segundo debate de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. La Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea propone al pleno que "las Fuerzas Armadas, sin descuidar su misión fundamental de defensa externa, intervendrán, por disposición del presidente de la República, en la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana". Con esta reforma los militares, cuando el jefe de Estado lo decida, realizarán las funciones que ahora corresponden en forma exclusiva a la Policía Nacional. Diario Expreso. 02/04/2011.

Declaran inocentes a imputados de rebelión en sucesos del 30 de Septiembre.- Los tres jueces del Cuarto Juzgado de Garantías de lo Penal de Pichincha, declararon la inocencia del Mayor Fidel Araujo, quien estaba por cumplir seis meses de prisión acusado de haber incitado a la rebelión de la Fuerza Pública en los hechos del 30-S. Diario También el coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, y los policías Luis Martínez, Jaime Paucar y Luis Bahamonde fueron declarados inocentes. Ellos estaban acusados de intento de magnicidio tras la sublevación policial del 30 de septiembre. El Comercio. 03/04/2011.

Presidente de la República y Ministro del Interior presionarán a los Jueces en caso de que declaren absuelto al coronel César Carrión. El ministro del Interior, José Serrano, advirtió que presentaría acciones legales contra el juez Presidente del quinto tribunal de Pichincha. Diario El Universo 13/05/2011. El presidente de la República, Rafael Correa, anunció que apelará la resolución si es a favor del coronel César Carrión y otros tres implicados. El Universo 15/05/2011. El jurista José de la Gasca

explica que las acusaciones por delitos de magnicidio, secuestro e intento de golpe de Estado fueron ventilados en el proceso del coronel Carrión, en la etapa de investigación fueron estudiados y al no encontrar elementos de pruebas solo se continuó con el de magnicidio. El Universo 15/05/2011.

Tres nuevos cables del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Ecuador se hicieron públicos a través de Wikileaks. Estos hablan del ex comandante de la Policía, Jaime Hurtado; el ex subsecretario de Asuntos Políticos, Ignacio Chauvín, y el ex ministro de Defensa, Wellington Sandoval. Respecto al general Hurtado -ahora en servicio pasivo- dice que usó su poder como máxima autoridad de la Policía Nacional (fue comandante entre abril de 2008 y junio de 2009) para extorsionar, facilitar el tráfico de personas, apropiarse de fondos públicos y obstruir las investigaciones contra miembros de esa institución. Sobre José Ignacio Chauvín reseña que mantiene contactos con el ex número dos de las FARC, Raúl Reyes, y que es amigo de Jefferson Ostaiza, quien está acusado de narcotráfico junto a sus hermanos. Diario Hoy 05/04/2011.

Abusos policiales.- Las denuncias por violaciones a DD.HH. presuntamente perpetradas por miembros de la Fuerza Pública son recopiladas por la Comisión Ecuamélica de Derechos Humanos (CEDHU). Según su base de datos, se han reportado 210 homicidios cometidos por policías desde el 2000 hasta el 2009. A eso se suman 243 denuncias de torturas. De enero a octubre del año pasado, 54 violaciones a los DD.HH. cometidas por policías fueron registradas por el organismo. Entre ellas aparecen supuestos abusos cometidos por agentes a mujeres, jóvenes, periodistas, extranjeros, sospechosos, otros policías, etc. El Comercio 13/04/2011.

Datos de la Inspectoría General de la Policía revelan que 789 uniformados

fueron dados de baja de la institución entre enero del 2006 y marzo de este año. 610 casos están vinculados con el cometimiento de delitos y el resto con faltas disciplinarias. En lo que va del 2011 fueron dados de baja once miembros. El jefe de Estado Mayor de la Policía, general Wilson Alulema, dice que en los últimos años se ha hecho una depuración, pero el proceso se ve limitado cuando jueces aceptan recursos de amparo interpuestos por policías sancionados. Desde el 2006, 189 uniformados separados fueron reingresados. El Universo 24/04/2011.

Aumento de salarios para policías.- El ministro del Interior Alfredo Vera sostuvo que existe un presupuesto de \$ 166'000.000 para aumento de salarios de los cuales \$ 82'000.000 son para el servicio activo y \$ 84'000.000 para el servicio pasivo. El funcionario detalló también que un primer desembolso de \$ 17'800.000 servirán para el pago del retroactiva de enero a la fecha a los uniformados pasivos, mientras que 13'020.000 han sido depositados para los agentes activos. Diario Expreso 05/05/2011.

1.127 agentes policiales fueron acreditados como policías judiciales para apoyar las investigaciones fiscales. Los uniformados se suman a los 5.551 agentes habilitados actualmente para investigaciones en la Dirección Nacional de la Policía Judicial (DNPJ). La asignación se realizó luego de la petición que realizó el comandante de la Policía Nacional, general Patricio Franco, al fiscal general del Estado, Washington Pesantez. El Universo 04/05/2011.

La tenencia ilegal de armas.- La tenencia ilegal se enmarca dentro de los delitos contra la seguridad pública. Por ese delito, en 2010, 2617 personas fueron detenidas a escala nacional, la mayor parte de ellos (993), en Guayas. Le siguió Los Ríos, con 281 detenidos; El Oro, 275; Esmeraldas 262; Pichincha, 199; Manabí, 198; Santo Domingo de los

Tsáchilas, 114; Santa Elena, 68; el Azuay, 34; Loja, 29; Sucumbíos, 25; el Cañar, 23; Orellana, 16; Tungurahua, 15; Carchi, 13; Cotopaxi, 12; Morona, 12; Napo, 9; Pastaza, 6; Bolívar, 3; y, Zamora, 1. En cambio, en 2009, por este delito fueron detenidos 2 961 personas en el país, Diario El Universo 06/05/2011.

Juicio a miembros del Grupo GAO por presuntos delitos de tortura.- A poco más de dos años de iniciado un proceso judicial contra ocho policías del desaparecido Grupo de Apoyo Operacional (GAO) –por el presunto delito de tortura del ecuatoriano Alexander Cadena y de los colombianos Luis Bastidas y José Granada–, el caso no tiene culpables llamados a juicio. Cadena, Bastidas y Granada iniciaron el juicio por torturas en el 2009, contra los miembros del GAO cuando el Tribunal Penal 3º de Pichincha no los encontró culpables en el robo de la joyería Terranova, en marzo del 2008, como dijeron los miembros policiales. A decir de los denunciantes, los agentes del GAO los torturaron para que reconocieran ser parte de los asaltantes. Dentro del caso, a inicios del 2010, el fiscal Luis Jaramillo absolvió a cuatro oficiales y solo acusó a cuatro policías de menor rango: Manuel Pinto, Héctor Díaz, Elmer Ordóñez y Jorge Muñoz. Posteriormente el dictamen mixto subió a consulta del fiscal distrital, Marco Freire, quien ratificó lo resuelto. Diario El Universo 10/06/2011.

Condenas por los sucesos del 30 de septiembre.- El Tribunal Segundo de Garantías Penales condenó al coronel Rolando Tapia, exjefe de la escolta legislativa, a tres años de prisión por atacar contra la seguridad interna del Estado, tras la revuelta policial del pasado 30 de septiembre. Los policías Mario Flores y Patricio Simancas, quienes fueron hallados cómplices, deberán cumplir 18 meses de prisión. Como encubridores deberán cumplir un año de cárcel los policías Marco Tibán, hermano de la asambleísta de Pachakutik Lourdes Tibán; Javier Noboa y Carlos Tasinchana. Diario El Universo. 30/06/2011.

MILITARES Y MINISTERIO DE DEFENSA

Habitantes de la frontera ecuatoriana sienten 'acoso' militar.- Según Mau-

ricio Gallardo, coordinador del Programa de Fronteras de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, los residentes en comunidades y poblados de zonas rurales de la frontera colombo-ecuatoriana, continúan siendo acosadas por militares no solo del Ecuador, sino también del vecino país, así como por grupos irregulares y al margen de la Ley. Gallardo señaló que, durante los procesos de vigilancia y patrullajes que efectúan militares ecuatorianos, se detiene a personas inocentes, especialmente campesinos, que se movilizan en sus tierras o que realizan comercio lícito entre los dos países de las poblaciones de frontera. Diario Hoy. 05/04/2011.

Aumento Salarial para militares.- El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ernesto González, informó que el incremento salarial es para todos los militares (38.246), pero con diferencias según el grado. Este incremento se realizará con retroactivo desde enero. Así también recordó que el año anterior ya hubo un aumento en la escala jerárquica superior, por tal razón el alza será para el sector que no tuvo esa oportunidad y no supera el 10%. El incremento máximo fue de 400 dólares. Diario Expreso 06/05/2011.

Consejo de Gobierno de la CONAIE, presidido por Humberto Cholango, llamó al diálogo a las Fuerzas Armadas, para conocer su opinión sobre la creación del Estado Plurinacional.- "En un informe (de las FFAA) al que tuvimos acceso, han dicho que los indígenas son una amenaza para la democracia, o dicen que los indígenas son un estorbo para el desarrollo, quisiéramos debatir, no hay que tener solo una fe ciega en el desarrollo que viene del occidente", enfatizó el líder indígena. Diario Hoy 19/05/2011.

El Ministerio de Defensa quiere convertir la fábrica de municiones Santa Bárbara en una productora de armamento de alta tecnología.- Al momento negocia con la firma norteamericana Daniel Defense International la producción de 40 mil fusiles tipo M4, utilizados en las guerras de Afganistán e Irak, dentro de un convenio a largo plazo que puede incluir el desarrollo de otros productos tecnológicos militares. Entre el 12 y 15 de abril de este año se

celebró la feria Latin America Aero Defense (LAAD 2011), la más importante de la región. Sucede cada dos años y su sede fue Río de Janeiro, Brasil. En un área de 42 mil metros cuadrados se presentaron 55 delegaciones oficiales y 600 expositores. En el stand P50 de la feria estaba Daniel Defense International (con sede en Georgia, EE.UU.) exhibiendo un cartel que anunciaba un acuerdo con Ecuador para la coproducción de rifles tipo M4 en la empresa militar Santa Bárbara.

Participación de los militares en la seguridad interna.- El general Ernesto González, resaltó que los conceptos y aplicaciones de seguridad y defensa han variado por las "vigentes amenazas" internas: "Delitos transnacionales, la lucha antidrogas, el respeto a los DD.HH.". Sin embargo, en el discurso no se refirió al operativo militar en las minas de Esmeraldas. "A las concepciones de defensa externa deben incorporarse las de orden interno con toda su conflictividad. Las FF.AA. no puede abstraerse de apoyar al Estado en el control y el mantenimiento del orden interno, en el apoyo a la gestión de riesgo y a entregar nuestro aporte al desarrollo nacional", sostuvo González. El Comercio 20/05/2011.

La destrucción, por parte de las Fuerzas Armadas, de la maquinaria que se utilizaba para la explotación minera (legal según el Gobierno) en los cantones esmeraldeños de San Lorenzo y Eloy Alfaro sigue generando críticas. La oposición en la Asamblea quiere pedir explicaciones a los ministros de Seguridad, Homero Arellano, y de Defensa, Javier Ponce. Mientras que dos juristas precisan comprobar si la actuación de la Fuerza Pública rebasó garantías ciudadanas. Para el jurista Édgar Terán, la Fuerza Pública y el Gobierno solo debían incautarse de la maquinaria y seguir los procesos legales correspondientes; no destruirla. A su juicio, más allá de si son ilegales o artesanales, las máquinas son propiedad privada. "Es un acto de violencia injustificable". Diario El Comercio 25/05/2011.

Estados de excepción.- El presidente de la República, Rafael Correa, a través del decreto Ejecutivo 727, extendió el estado de excepción de la Asamblea Nacional, hasta el 8 de mayo de 2011.

Correa dispuso al Ministro de Defensa Nacional que, mediante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ejecute un plan de contingencia, con la finalidad de que sus efectivos garanticen a la Función Legislativa las condiciones de seguridad necesarias para que pueda ejercer a plenitud sus atribuciones y facultades constitucionales y legales, así como garantizar la seguridad interna, ciudadana y humana, detalla la página web del Legislativo. Diario Hoy 12/04/2011. El presidente de la República, Rafael Correa, a través del decreto Ejecutivo 759, extendió por 60 días más el estado de excepción en todas las instalaciones de la Asamblea Nacional. Diario Hoy 11/05/2011.

Control de armas regresó a las Fuerzas Armadas del Ecuador.- El ministro del Interior, José Serrano, informó que el registro y calificación de armas, así como otorgar los permisos para la tenencia y porte de las mismas, es otra vez competencia de las Fuerzas Armadas, a través de un organismo que se creó hace varias semanas. El organismo estará conformado por representantes de varias instituciones, entre ellas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Diario El Universo. 26/06/2011.

RELACIONES ECUADOR – USA

Heather Hodges, embajadora del los Estados Unidos, abandonó el Ecuador. La ex embajadora de Estados Unidos, Heather Hodges, dejó el Ecuador cumpliendo el pedido del gobierno ecuatoriano tras ser declarada persona "non grata", por revelaciones de Wikileaks. El Comercio 12/04/2011. El canciller Ricardo Patiño insiste en que las relaciones con Estados Unidos "continúan igual, con la única diferencia de que no tienen embajadores". Sin embargo, políticos y diplomáticos consideran que la forma en la que el Gobierno manejó el "impasse" con ese país, a propósito del cable filtrado por Wikileaks, fue precipitada y afectó los intereses del Ecuador. Dos ex embajadores de carrera, un ex ministro y un general del Ejército coinciden que en que la crisis diplomática no hubiera llegado a las actuales dimensiones si

se hubiese actuado con cautela. Para estos personajes, cuatro fueron los errores que cometió el Régimen. Ellos comentan que el cable de Wikileaks no es una información oficial; que el canciller Patiño no agotó otras instancias diplomáticas en lugar de pedir la salida de Hodges. También concluyen que el presidente Correa tuvo un protagonismo innecesarios y que no se siguió otros ejemplos en el mundo. El Comercio 05/04/2011.

El jefe de operaciones especiales del Comando Sur de los Estados Unidos, Thomas Brown, llamó al continente a "unir esfuerzos" para combatir las "fuerzas" que lo amenazan, como el narcotráfico y el terrorismo, en el marco de unos ejercicios militares conjuntos inaugurados en El Salvador. Las maniobras castrenses se extenderán durante nueve días y participarán en ellas militares de Bahamas, Belice, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, los EEUU, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, el Uruguay, República Dominicana. Diario Hoy 17/06/2011.

RELACIONES ECUADOR – VENEZUELA.

La cooperación en materia de seguridad y defensa es uno de los principales temas que Ecuador y Venezuela analizaron en Salinas, sede del noveno encuentro presidencial entre los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa. El ministro de Defensa, Javier Ponce, indicó que existen cinco acuerdos de cooperación militar con Caracas. Entre ellos, capacitación e intercambio de oficiales. Ponce reveló que los seis aviones Mirage 50 donados por Venezuela en el 2009 se encuentran paralizados desde el último trimestre del 2010. "Ahora estamos solicitando (a Venezuela) una nueva entrega de repuestos para ponerlos operativos. En este momento están en auditoría", informó. Además, informó que Venezuela dará capacitación a militares ecuatorianos en materia de radares, por su experiencia en el manejo de equipos chinos, que también Ecuador adquirió en el 2010 a China por \$ 60 millones para el control en la frontera norte. Diario El Universo 08/06/2011.

RELACIONES ECUADOR – UNASUR

La secretaria general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), María Emma Mejía, y varios ministros de Defensa de la región inaugurarán en Buenos Aires el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED), primer órgano permanente del Consejo de Defensa del bloque. El CEED, con sede permanente en Buenos Aires, "fue creado a partir de la necesidad de consolidar una identidad suramericana en materia de Defensa. Tiene como finalidad la construcción de una visión propia, orientada desde las necesidades específicas y el interés común de los países de la región", recordó el comunicado de la cartera de defensa. Diario Hoy 21/05/2011

RELACIONES ECUADOR – ORGANISMOS INTERNACIONALES.

Amnistía Internacional (AI) condenó la "impunidad" de la Policía Nacional en casos de violación de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad en el Ecuador. Hasta el 2010 "seguían sin resolverse violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad", subraya la organización defensora de los derechos humanos en su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, que se basa en datos de 2010 y se difundió en la capital británica. Según el documento, "se tuvo noticia de nuevas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Policía Nacional, encargado de la delincuencia organizada". Según el AI el GAO, "ha estado relacionado con decenas de casos de tortura, malos tratos y posibles ejecuciones extrajudiciales, desde su creación en 1996". Diario Hoy 12/05/2011.

Escuela de defensa del alba se inaugura en Bolivia.- El 31 de mayo en Santa Cruz de Bolivia, se inauguró la Escuela de Defensa y Soberanía (EDS) de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). En la EDS estudiarán oficiales y también civiles de los ocho países del Alba: Cuba, Venezuela, Nicaragua, el Ecuador, Honduras, Antigua y Barbuda, Domi-

nica, San Vicente y las Granadinas, porque, según Morales, la defensa y la seguridad para proteger la soberanía y la independencia están comprendidas en el Alba como derecho y deber social. Diario Hoy 04/06/2011. La creación de la Escuela y la Academia Militar de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) tiene implicaciones "muy serias, porque distorsionan la política de defensa de la región". Así lo afirmó el ex ministro de Defensa y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Oswaldo Jarrín. Según Jarrín, la política de defensa actual no se identifica con la de la Alba (izquierda) y, si se crea una escuela, esta debe ser de carácter exclusivamente militar y no obedecer a otros intereses. De ahí que consideró que la medida adoptada "incrementaría la politización de las FFAA, que no estarían obedeciendo a los objetivos nacionales establecidos en la Cons-

titución de cada Estado, sino a los objetivos políticos de la organización subregional política (Alba) de interés venezolano". Diario Hoy 11/06/2011.

Violaciones a los Derechos Humanos cometidas por Fuerzas Armadas del Ecuador. Según las Conclusiones del relator especial de la ONU, sobre Ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, las violaciones más comunes de derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas de Ecuador comprenden "el allanamiento de morada, robos y actos de humillación pública (como el hecho de forzar a las personas a desnudarse en público). Estos abusos parecen ser comunes y quedan impunes". Alston entregó el informe final de su visita a Ecuador en el 17º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Alston menciona que recibió información de varios homicidios supuestamente cometidos por el Ejército. Resalta un caso emble-

mático: la muerte de un ecuatoriano y dos colombianos, ocurrida el 18 de enero de 2010, mientras navegaban a bordo de una piragua por el fronterizo río San Miguel. Este Diario buscó una versión del Ministerio de Defensa. Esa Cartera de Estado respondió por escrito. En ese documento reza que el caso de los tres fallecidos en una acción militar "ha llegado a conocimiento del fiscal de Sucumbíos, con el expediente No. 037-2010, en el cual se encuentran sindicados oficiales y un señor general, lo que evidencia que la fuerza militar no ejerce presiones o intimidaciones para evitar que se inicien acciones legales". Alston dice en su informe que una testigo de la muerte de los supuestos guerrilleros recibió la advertencia de que, si continuaba en la causa, sería asesinada. El Comercio 18/06/2011.

*Investigadora del Boletín DSD



Comité Editorial:

- Bertha García Gallegos
- Francisco Rhon Dávila
- Juan Pablo Aguilar
- Berenice Cordero

Asesoramiento Internacional:

- Dr. Gustavo Suárez Pertierra – Real Instituto Elcano (España)
- Dr. Louis Goodman – American University (USA)
- Dr. Raúl Benítez Manaut – UNAM
- Dra. Sonia Alda – Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado – España

Investigadora:

- María Sol Espinosa

Programa Democracia, Seguridad y Defensa

Dirección: Av. 12 de Octubre y Patria. Universidad Católica. Torre 2, piso 9, oficina 901.

Teléfonos: (593-2) 299 1582 / (593-2) 299 1700 ext. 1474 / 1041

e-mail: bgarcia@puce.edu.ec

Correspondencia y solicitud de ejemplares: solespinosa86@gmail.com